

Dictamen en relación con la consulta planteada por una empresa municipal, relativa a la comunicación, a una entidad de derecho público dependiente de otra Administración, de ciertos datos de sus abonados

Una empresa municipal solicita la opinión de la Agencia Catalana de Protección de Datos sobre la legitimidad de comunicar determinados datos personales de los usuarios del servicio de abastecimiento de agua potable de un municipio a una entidad de derecho público adscrita a otra Administración catalana.

I

[...]

II

Un ente público dependiente de una Administración (en adelante, ente público) solicita a una empresa municipal creada por otra Administración (en adelante, empresa municipal) que le facilite los siguientes datos de sus abonados: nombre, dirección (calle, número y población), DNI o NIF, y si es propietario o arrendatario de la finca en relación con la que se presta el suministro de agua y el importe de la fianza exigida.

Como cuestión primera, hay que manifestar que, en la medida en que la actuación pretendida por el ente público comporta el tratamiento de datos correspondientes a personas físicas identificadas o identificables, resulta aplicable la normativa sobre protección de datos personales. Por consiguiente, el tratamiento previsto está sujeto a los principios y obligaciones de dicha normativa, especialmente a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y al Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, de desarrollo de la Ley Orgánica (en adelante, LOPD y RLOPD, respectivamente).

A *contrario sensu*, los datos referidos a personas jurídicas quedan fuera del ámbito de aplicación de la normativa sobre protección de datos, ya que no son datos personales, salvo, eso sí, los datos referidos a los representantes legales de aquellas, ya que, en la medida en que son personas físicas, sus datos también reciben esta calificación.

En segundo lugar, hay que poner de manifiesto que el tratamiento previsto supone «una comunicación o cesión de datos», entendida como toda revelación de datos efectuada a una persona distinta del interesado (artículo 3 i) de la LOPD). Esta comunicación de datos se prevé desde la empresa municipal hacia el ente público.

El análisis que se efectúa a continuación se hace partiendo de la premisa de que la empresa municipal es la responsable del fichero que contiene los datos personales de las personas abonadas al servicio de suministro de agua. Los datos a los que se refiere la consulta están contenidos en el fichero «Clientes», inscrito, a solicitud de la empresa municipal, en el Registro de Protección de Datos de Cataluña por Resolución de esta Agencia.

El artículo 11 de la LOPD regula el régimen general de la comunicación de datos, según el cual, los datos sólo pueden ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de finalidades directamente relacionadas con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado; consentimiento que no es necesario cuando, entre otras circunstancias, la cesión está autorizada en una ley.

Así pues, hay que analizar, en el marco del artículo 11 de la LOPD, si la finalidad perseguida está directamente relacionada con las funciones legítimas del cedente (la empresa municipal) y del cesionario (el ente público), y, en su caso, si es necesario el consentimiento de los interesados o bien existe una habilitación legal que exime de la prestación del consentimiento.

III

3.1. En cuanto a las funciones del cesionario, es decir, el ente público, del artículo 4 de la Ley 13/1996, de 29 de julio, del registro y el depósito de fianzas de los contratos de alquiler de fincas urbanas y de modificación de la Ley 24/1991, de la Vivienda, se desprende la obligatoriedad de las compañías de suministros y servicios de depositar las fianzas que se exigen a sus abonados para la formalización de contratos que afectan a fincas urbanas:

«También son objeto de depósito sin interés las fianzas que las empresas de suministros y servicios exigen a los abonados para la formalización de contratos que afectan a fincas urbanas.»

El artículo 5 del Decreto 147/1997, de 10 de junio, por el que se regula el registro de fianzas de los contratos de alquiler de fincas urbanas y el depósito de fianzas, establece que el Registro de Fianzas de los Contratos de Alquiler de Fincas Urbanas, que depende del ente público, acredita el cumplimiento de la obligación de depósito de la fianza y contiene los datos correspondientes a los contratos suscritos. El artículo 8.4 del mismo decreto establece que la investigación y la comprobación del cumplimiento de la obligación de constituir y depositar las fianzas y promover los procedimientos sancionadores en caso de infracción, así como la comprobación y el registro de las liquidaciones de las fianzas y los contratos constituidos en régimen de concierto, corresponden al Servicio de Fianzas del ente público.

De acuerdo con los artículos 14 y 22 de dicho Decreto 147/1997, las compañías de suministros y servicios deben acogerse obligatoriamente al régimen de concierto, y las mismas, como titulares, deben efectuar las liquidaciones periódicas a las que se refiere el decreto, de modo que la inclusión en un concierto equivale al depósito de la fianza.

El artículo 22 también establece que estas compañías deben presentar trimestralmente una liquidación en la que conste la relación de altas y bajas de contratos. En caso de que la liquidación sea positiva, el ingreso tiene que hacerse al ente público.

De la normativa expuesta se desprende que este ente público es competente para velar por el cumplimiento de la obligación de constituir y depositar las fianzas, que en el caso de las fianzas de los abonados a los servicios de suministro (como el de agua) se considera cumplida con la inclusión en un concierto.

Por consiguiente, se puede afirmar que la finalidad que persigue el ente público con la solicitud de datos prevista (suscribir el concierto con la empresa municipal y recaudar las cantidades económicas de las fianzas previstas) está relacionada directamente con las funciones del ente público.

3.2. En cuanto a si la finalidad perseguida está directamente relacionada con las funciones legítimas del cedente, es decir, de la empresa municipal, hay que señalar lo siguiente:

La empresa municipal es una sociedad mercantil anónima de economía mixta, gestora del servicio municipal de suministro de agua potable y saneamiento de un municipio de Cataluña. De acuerdo con los estatutos de la empresa, creada por un Ayuntamiento, ésta se encarga, entre otros servicios, del suministro domiciliario de agua potable y alcantarillado, realizando, dentro de un determinado Término Municipal y/o núcleos de población adscritos, todas las funciones propias del mismo, como son las de captación, conducción, tratamiento y distribución de agua potable, conservación de las obras e instalaciones, instalación y mantenimiento de contadores, gestión de abonados, emisión de recibos, facturación y cobro de los mismos (artículos 1 y 2 a) de los Estatutos de la empresa municipal, hechos públicos en el BOP de Tarragona). Se rige por sus Estatutos y, en lo no contemplado en éstos, por la Ley 7/1985 de 2 de abril; por el Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril; por el Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña; por el Decreto 179/1995, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de obras, actividades y servicios de los ente locales; por los preceptos de la Ley de Sociedades Anónimas, y por las demás disposiciones que le sean aplicables, en especial el Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.

Como empresa prestadora del servicio público de suministro de agua, la empresa municipal está obligada a acogerse al régimen de concierto y a efectuar trimestralmente una liquidación de las fianzas de los abonados, en la que conste la relación de altas y bajas de contratos de suministro de agua, y, en caso de que la liquidación sea positiva, a efectuar un ingreso al ente público (artículos 14 y 22 del Decreto 147/1997).

De la normativa expuesta se desprende que la finalidad que el ente público pretende con la comunicación de datos (suscribir el concierto con la empresa municipal y recaudar las cantidades económicas de las fianzas previstas) está directamente relacionada con la función pública que realiza la empresa municipal como prestadora del servicio público de suministro de agua, y con la obligación de esta sociedad de efectuar el concierto y de abonar al ente público las cantidades correspondientes a las fianzas exigidas a sus abonados.

3.3. En cuanto a la segunda cuestión sobre el artículo 11 de la LOPD, es decir, si es necesario el consentimiento de los interesados o bien existe una habilitación legal que exima de la obligación de prestar el consentimiento, hay que señalar lo siguiente:

Como decíamos, de los artículos 1 y 4 de la Ley 13/1996, de 29 de julio, del registro y el depósito de fianzas de los contratos de alquiler de fincas urbanas y de modificación de la Ley 24/1991, de la Vivienda, se desprende la obligatoriedad de depositar en el Registro de Fianzas de los Contratos de Alquiler de Fincas Urbanas las fianzas que las compañías de suministros y servicios exigen a sus abonados para la formalización de contratos que afectan a fincas urbanas.

Y de los artículos 14 y 22 del Decreto 147/1997, de 10 de junio, por el que se regula el registro de fianzas de los contratos de alquiler de fincas urbanas y el depósito de fianzas, se desprende la obligatoriedad de las compañías de suministros y servicios de acogerse al régimen de concierto, así como de depositar en el Registro del ente público dichas fianzas.

De acuerdo con lo expuesto, se puede considerar que la estipulación legal de depósito de las fianzas que las empresas de suministros y servicios deben exigir a los abonados, y que se concreta en la obligatoriedad de estas compañías de acogerse al

régimen de concierto y de depositar las fianzas en el Registro del ente público, habilitaría la comunicación de datos al ente público a fin de suscribir el concierto y depositar allí las fianzas.

Por consiguiente, hay que concluir que la empresa municipal puede comunicar al ente público determinados datos personales de los abonados al servicio de suministro de agua sin necesidad del consentimiento previo de las personas afectadas, es decir, de los propios abonados.

Otra cosa son los datos concretos que se pueden comunicar. En este sentido, hay que tener en cuenta el principio de calidad de los datos, ex artículo 4 de la LOPD, según el cual, sólo se pueden recoger para ser tratados los datos personales cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido.

El artículo 4 de la Ley 13/1996 habilita para comunicar los datos necesarios a fin de que se formalice el concierto y se depositen las fianzas a través de pagos trimestrales. En este sentido, se consideran necesarios, adecuados y pertinentes los datos identificativos de los abonados al servicio, consistentes en nombre y apellidos, dirección (calle, número y población), DNI o CIF e importe de la fianza. Pero se consideran excesivos los datos relativos a si los abonados son propietarios o arrendatarios del lugar en el que se les suministra el agua, ya que estos datos no son necesarios para suscribir el concierto ni para efectuar el depósito de las fianzas.

Por consiguiente, se considera legítima la comunicación al ente público de los datos referidos en la consulta, salvo los consistentes en si los abonados son propietarios o arrendatarios del lugar en el que se les suministra el agua.

Conclusiones

Se considera legítima la comunicación, desde la empresa municipal de una Administración local hacia el ente público dependiente de otra Administración, sin necesidad de requerir el consentimiento de las personas abonadas, de sus datos personales relativos a nombre y apellidos, dirección (calle, número y población), DNI o CIF e importe de la fianza.

Se considera ilegítima la comunicación, desde la empresa municipal hacia el ente público de otra Administración, de los datos consistentes en si los abonados son propietarios o arrendatarios del lugar en el que se les suministra el agua, dado que, al no ser datos necesarios para gestionar el depósito de las fianzas que establece el artículo 4 de la Ley 13/1996, se consideran excesivos.